

Sentencia del Juzgado de Distrito.

"Juzgado de Distrito. San Cristóbal las Casas, Julio diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: considerando, que el C. Manuel Cancino y Gutierrez denunció en Febrero de 1853 el terreno nacional conocido con el nombre de "Ni6," que declarado con lugar el denuncia, se probó la nacionalidad del terreno y se practicó su avalúo conforme á las disposiciones entonces vigentes: que en este estado, el denunciante cedió su derecho al C. Mariano Leoncideo Morales, quien á su vez hizo otro tanto en favor del C. Manuel Camacho: que practicada la mensura y levantado el plano respectivo por cuenta de éste, consta tener el terreno mensurado una area de ciento cincuenta y tres hectaras, y tres aras: que hechas las publicaciones del denuncia, por no haberse justificado que la hacienda pública se hallase en posesion del terreno denunciado, no ha resultado opositor que alegara mejor derecho; que aunque la parte del C. Camacho pretende gozar de la baja de la mitad del valor del terreno, no ha probado la existencia de las condiciones que la ley de la materia requiere para ello; y finalmente: que, segun aparece de las constancias de este expediente, se ha enterado en cajas, por cuenta del valor del referido terreno, la cantidad de ciento sesenta pesos; con fundamento de la ley de 20 de Julio de 1863 y de entera conformidad con lo pedido por el Ministerio fiscal, este juzgado declara:

Primero; se adjudica en propiedad y sin perjuicio de tercero al C. Manuel Camacho, vecino de esta ciudad, el terreno baldío denominado "Ni6," ubicado en las inmediaciones del pueblo de Zinacantan de este Departamento, constante de ciento cincuenta y tres hectaras y tres aras, colindante con las *Labores* llamadas *Agil*, *Tierra Colorada*, *Concepcion*, y *Santa Te-*

resa, tierras tituladas de las *Salinas* y las de igual condicion del pueblo de *Chamula*.

Segundo; la Gefatura de Hacienda practicará la liquidacion correspondiente, conforme á la tarifa de 22 de Julio de 1863, sin el goce de baja alguna, y abonará al interesado el valor de la póliza de fojas 6 de este expediente, del cual se sacará copia y se enviará al Ministerio del ramo, por conducto del gobierno del Estado para los efectos consiguientes.

Hágase saber.

Así lo decretó, mandó y firmó, el C. Lic. Juan José Ramirez, juez de Distrito propietario del Estado de Chiapas, por ante mí el infrascrito secretario. Doy fé.—(Firmados).—*Juan J. Ramirez.*—*J. Crisóstomo Lara.*

Es copia, San Cristóbal Las Casas, Julio veinticuatro de mil ochocientos setenta y uno.—*J. Crisóstomo Lara.*

CONTRABANDO.

Juicio seguido en el Juzgado de Distrito de Yucatan, con motivo de la introduccion á la Isla de Cosumél de varios efectos que conducía el Pailebot nacional "Rita."

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que el ombrollo y confusion que se advierte en los presentes autos, á consecuencia de que desde su inicio no se procuró dar regularidad y buen orden á los procedimientos, hace ya casi imposible se subsanen sus faltas notables de cuyo único modo puedo conseguirse se deslinde y persiga separadamente la diferente responsabilidad de los contrabandistas y del celador del resguardo que intervino en el asunto. Tanto por aquella causa irremediable ya, cuanto por ser muy notable el retardo que ha experimentado este

juicio y principalmente la insignificante importancia del interés que se ventila en él, hacen que sea preciso ya prescindir de tanto desórden y concretarse á dar de una vez el fallo definitivo sobre todos los puntos procesados, y para lo cual dan el suficiente conocimiento de causa las actuaciones que forman las cuatro piezas de que este juicio se compone.

De las primeras fojas de la primera, consta plenamente justificada la importación de efectos que se hizo de un país extranjero, con notoria violación de la 2ª y 3ª parte del artículo 21 de la ordenanza general de Aduanas marítimas de 21 de Enero de 1856, y esta grave responsabilidad pesa principalmente sobre los CC. Rafael C. Muñoz que fué el importador, el finado Antonio Riveron dueño de ellos, y el capitán del pailebot nacional "Rita" Antonio Martínez, supuesto que incurrieron en las faltas que indican las fracciones 1, 2 y 4 del artículo 23 de dichas ordenanzas.

Estando pues, todos los capítulos que forman el respectivo cargo contra aquellos individuos, suficientemente probados en autos, no hay duda que por el mismo hecho están incurso en las respectivas penas que establece el artículo 26 de la mencionada ley; no dejándose de advertir que el citado Muñoz incurrió además en otra pena, por la exportación que hizo de una suma, aunque insignificante, sin pagar los derechos correspondientes.

Respecto de la responsabilidad que contrajo por la irregular conducta que observó el celador C. José D. Duarte, en el hecho que motiva este juicio, no hay duda que hubo por su parte esa connivencia que la ley quiso evitar en la fracción 3ª del artículo 24, no habiendo cumplido estrictamente con su deber, al notar, como ha debido hacerlo, las faltas á que se contraen las fracciones 8ª y 9ª del artículo 25; incurriendo, por tanto, en la caución penal que indica para estos casos el artículo 28 fracción 2ª.

En esta virtud, el que suscribe se ve en el preciso caso de pedir á ese tribunal, que en méritos de lo expuesto sentencie este juicio en los términos que lleva indicados, imponiendo al celador D. José D. Duarte una multa de veinticinco pesos, en expiación de la culpa que le resulta.

Mérida, Agosto veintinueve de mil ochocientos sesenta y ocho. (Firmado.)—*J. Jussu Castro.*

Sentencia del O. Juez de Distrito.

En la ciudad de Mérida á los veinticinco días del mes de Agosto de mil ochocientos sesenta y ocho años: el O. Lic. Juanuario Manzanilla, Juez de Distrito del Estado de Yucatan, hallándose en audiencia pública, el infrascrito escribano le dió cuenta con estos autos, y hecha relación de sus constancias iniciadas en la Isla de Cozumel por el Juez de paz de dicha isla á solicitud de los empleados del resguardo de la aduana marítima de Sisal; las declaraciones tomadas allí; las recibidas en los juzgados de 1ª instancia de esta capital; las diligencias practicadas de que resultó quedasen en libertad los interesados en este juicio; las que se practicaron en que consta el acta del juicio verbal de comiso, celebrado el día once de Octubre último, cuyo juicio se abrió á prueba; la providencia en que se mandó entregar el pailebot "Rita" á su patron Antonio Martínez, bajo la fianza de D. Andres Vscelay, por valor de doscientos pesos en que fué avaluada dicha embarcación; las pruebas rendidas en esta ciudad y recibidas en ella, en Sisal, en Cozumel y en San Pedro, punto de la Colonia de Belice; el auto en que se citó á los interesados para alegar de bien probado; el que se dictó declarando por bastantes los estrados y que se siguiera el juicio en rebeldía; la citación para sentencia, previa la alegación del O. Fiscal, y considerando:

Primero; que está plenamente probado

que el pailebot nacional "Rita," procedente de Belice, ancló en el fondeadero de la isla de Cozumél y desembarcó efectos extranjeros á la luz del día, con consentimiento y aprobacion de D. José Dolores Duarte, que hacia de empleado de la aduana de Isla Mujeres y de estacion en aquel punto, y de D. Antonio Riveron que era el gefe político nombrado por el gobierno del Estado.

Segundo; que D. Antonio Riveron hizo resistencia y oposicion á los celadores del resguardo en la averiguacion de los hechos que han dado lugar á estas diligencias.

Tercero; que D. Rafael Crisanto Muñoz exportó de la mencionada isla de Cozumél ciento veinticinco pesos, de los cuales no pagó los derechos respectivos.

Cuarto; que el patron del pailebot "Rita," Antonio Martinez, desembarcó y vendió en la misma isla un barril de harina á D. Apolonio Delgado.

Quinto; que las pruebas presentadas por D. Rafael Crisanto Muñoz para justificar que no importó en Cozumél efectos extranjeros, están en abierta oposicion con lo que el mismo ha confesado, á que se añade que las declaraciones de los testigos son vagas y no prueban la identidad de los efectos á que se refieren con los importados en Cozumél, y en consecuencia carecen de valor judicial.

Sesto; que los testigos presentados por el mismo señor para probar que no exportó de Cozumél los ciento veinticinco pesos, todos son de oídas, y por ser esto una prueba negativa tampoco tiene fuerza legal.

Sétimo; que la excepcion alegada por Martinez de que el barril de harina que desembarcó para vender era de su nota de rancho, no tiene fundamento, supuesto que cuando mas las embarcaciones de la costa llevan pan para su rancho, pero nunca harina para elaborar.

Octavo; que en consecuencia de lo expuesto en el primer considerando, se faltó á la 1ª y 2ª parte del artículo 21 de la orde-

nanza general de aduanas de 21 de Enero de 1856 por falta del manifiesto general, factura pormenorizada y recibo consular, así como tambien á las fracciones 8ª y 9ª del artículo 23 de dicha ordenanza, por la no presentacion del manifiesto por el patron y por no haberla hecho de los pasajeros, equipaje y sobrante de rancho.

Noveno; que en los hechos establecidos en el segundo considerando, se nota que el gefe político D. Antonio Riveron, incurrió en faltas ministeriales y del orden comun.

Décimo; que en lo expresado en el tercer considerando, se faltó al 5º caso del artículo 23 de la ley citada. Con cuanto mas ver era necesario, el C. Juez, á nombre de los Supremos Poderes de la Nacion, dijo: que debia declarar y declaró:

Primero; que en virtud de estar comprendido el motivo de este juicio en el 1º y 2º caso del artículo 23 de la ordenanza de aduanas, le impone la pena que demarca la primera y segunda parte del artículo 26 de la misma ley, que es la confiscacion y pérdida de todas las mercancías aprehendidas en Cozumél y del pailebot nacional "Rita," y ademas, la pena corporal señalada á los dueños, consignatarios, conductores y capitanes.

Segundo; no se hace declaracion ninguna respecto de D. Antonio Riveron, por haber fallecido en esta ciudad.

Tercero; que á la exportacion de los ciento veinticinco pesos, hecha por D. Rafael Crisanto Muñoz, se le impone la pena que demarca el artículo 26 de la ordenanza de aduanas en su fraccion 5ª

Cuarto; que á D. José Dolores Duarte, por haber faltado al tercer caso del artículo 24 de la ordenanza, se le impone la pena del artículo 27 fraccion 2ª, de conformidad con la parte primera del artículo 29, cuya pena es la pérdida del empleo que ya tiene por haber servido al imperio, sacándose testimonio de lo que sea conducente para remitir al C. Juez de lo criminal en turno del Estado, para que le continúe su

causa por el abuso de confianza, habiéndose solo impuesto esta pena por analogía, por no traerla especificada la fracción 3ª del artículo 27 que le comprende.

Quinto; que por las faltas en que incurrió el patron Antonio Martinez, por no haber cumplido las fracciones 8ª y 9ª del artículo 25, se le impone la pena de veinticinco pesos de multa segun la fracción 2ª del artículo 28.

Sesto; que se saque testimonio de este fallo para remitir entro tres dias al Administrador de la aduana marítima de Sisal, para que cumpla con el artículo 142 de la ley de procedimientos y para que haga la distribucion del comiso, de acuerdo con los artículos del 114 al 126 de la misma ley, con lo demas conducente á la ejecucion de este fallo, dirigiéndose oficio al Juez de paz de Cozumel para que no vuelva á recibir declaraciones con juramento sino con la promesa de la ley, ostendiéndolas en papel sellado y elevándose los autos á la superioridad para la revision, á fin de procurar despues de ella la aprehension de los que han incurrido en pena corporal para seguirles la causa sacándose, testimonio de lo conducente de estas diligencias. Y por esto que el C. juez proveyó, así lo manda y firma, de que doy fé. (Firmado).—*J. Manzanilla*.—Ante mí.—*José M. Río*.

Pedimento del C. Promotor de Circuito.

C. Magistrado de Circuito.

El que suscribe, á vd. dice: que evacuando el informe que se le manda, sobre el primer punto y la parte final de la fracción resolutive del fallo que pronunció el día veinticinco del mes próximo pasado, en el juicio de comiso del pailebot nacional "Rita," tengo la honra de manifestar á esa superioridad, que la pena á que se refiere el primer punto resolutive, solo comprende á D. Rafael Crisanto Muños, como el importador de las mercancías, y á D.

Antonio Martinez como patron del "Rita", supuesto que estos hicieron el contrabando en un puerto no habilitado para el comercio extranjero, ni siquiera aun en tiempo del llamado impcio. Fué por lo mismo, contrabando el que hicieron, á pesar de haber consentido en la introduccion el ex-celador D. José Dolores Duarte, y el finado jefe político D. Antonio Riveron, quienes permitieron el desembarque de los efectos extranjeros, por que con su consentimiento no pudieron formar una ley que habilitarse á Cozumel para el comercio extranjero. Estos faltaron, pero no por eso Martinez y Muñoz dejaron de hacer el contrabando á sabiendas, como que muy bien debian saber que Cozumel no era puerto habilitado para el comercio extranjero. Si la connivencia de Duarte y Riveron con los importadores dichos, hubiera sido en un puerto habilitado, siendo ellos empleados de la Aduana, el caso seria de fraude; pero como pasó, tiene que ser contrabando.

Que si se expresó en el mismo punto resolutive, que ademas de la confiscacion, se imponia á Martinez y Muñoz, la pena corporal señalada á los dueños, consignatarios, conductores y capitanes, fué para arreglar el fallo á lo literalmente dispuesto en la fracción primera y segunda del art. 26 de la ordenanza general de Aduanas de 31 de Enero de 1856, vigente, segun el cual y la opinion de respetables abogados en el fallo del juicio verbal, se debe aplicar la pena corporal, sin previo juicio criminal; pero como conforme al derecho natural, á nadie se le puede imponer pena corporal sin oírsele y permitirle la libertad de defenderse, con los otros requisitos establecidos por la Constitucion nacional, se mandó al fin del último punto resolutive sacar testimonio de lo conducente, para seguirles la causa respectiva á los incursores en pena corporal, siendo esta la declaracion legal y la que ha de ejecutarse, conforme á la razon, á la ley y á la practica.

Es lo que tengo la honra de informar á vd

Mérida, Octubre diez y nueve de mil ochocientos sesenta y ocho. (Firmado). *L. Manzanilla.*

Sentencia del Tribunal de Circuito.

En la ciudad de Mérida á los veintidos dias del mes de Setiembre de mil ochocientos sesenta y ocho años: el C. Lic. Sebastian Rubio, primer suplente del Tribunal de Circuito, conociendo de esta causa por excusa del propietario; habiendo visto los autos seguidos en primera instancia con motivo del desembarque clandestino que en Cozumel hizo el pailebot nacional "Rita" el 10 de Agosto del año proximo pasado y de la resistencia y escándalo que con este motivo provocó el gefe político D. Antonio Riveron, y en ellos la confusion con que procedieron los Jueces de primera instancia; visto el pedimento fiscal, la sentencia pronunciada y notificada en rebeldía; visto en esta segunda instancia los alegatos de las partes, los pedimentos fiscales y el informe dado por el C. Juez de Distrito, y considerando:

Primero; que si bien se ha confundido el procedimiento en omisiones y consiguientes infracciones, existen en la causa con la determinacion conveniente, los hechos, la defensa y las pruebas necesarias, en cuya virtud, conforme á la ley 2 tit. 16 lib. 11 de la nov. recop. puede fallarse en esta segunda instancia.

Segundo; que es inculpable el lapso de los veinte dias que el art. 133 de la ley de procedimiento señala al juzgado de Circuito para esa segunda instancia por la excusa advertida del propietario y la inhabilidad consiguientemente declarada del C. fiscal para su conocimiento.

Tercero; que aunque los autos han venido á esta superioridad por simple revision, sensiblemente se advierte que la sentencia de primera instancia fué pronunciada con infraccion de todo procedimiento,

imponiendo penas que impiden la aplicacion del art. 132 de la misma ley de procedimientos, por cuya causa ha debido repararse en esta segunda instancia aquella infraccion, oyéndose á las partes por no haber recurso de nulidad contra semejante procedimiento en causa criminal.

Cuarto; que la sentencia pronunciada por los fundamentos que expone, ha declarado el comiso de los efectos aprehendidos y del pailebot "Rita," condenando á la vez á diez años de presidio á D. Rafael Crisanto Muñoz como contrabandista, y á D. Antonio Martinez como capitán y propietario de aquella embarcacion.

Quinto; que esta condenacion, si bien ha debido hacerse con separacion del juicio de comiso, segun el art. 140 de la ley de procedimientos, no obstante su infraccion puede segun se ha dicho, revisarse ambos puntos por estar cumplidos y acumulados en el procedimiento los hechos en la forma bastante que para estos casos determina la ley antes citada de la nov. recop.

Sesto; que la pena impuesta ademas al referido Muñoz por la exportacion, es justa en los fundamentos en que la apoya el C. Juez de Distrito.

Setimo, que la condenacion que se hace al guarda D. José Dolores Duarte y procedimiento que se determina para ser juzgado por abuso de confianza, es de todo punto revocable, por que dejó de ser guarda desde que se presentó el gefe político en la Isla Mujeres y Cozumel y fué restablecida la República en estos puntos, y mucho mas desde el dia 8 de Agosto anterior á la importacion en que solo atribuye el abuso, segun el oficio que obra á fojas 81 de la primera pieza, debiendo considerarse compurgada con la prision sufrida, su complicidad con el gefe político como hombre particular en el abuso que este cometia.

Octavo; que no deben quedar desapercibidas las faltas á infracciones que se advierten en los autos, cometidos por el C. Lic. Juan José Herrera, que al recibir los autos

de comiso en que constaba la aprehension del barco y efectos, no llamó á juicio verbal ni procedió á formar por cuerda separada los incidentes criminales, infringiendo así los artículos 127 y 140 de la ley de procedimientos: que así mismo infringió el art. 19 de la Constitución, conservando en prision arbitraria sin el auto motivado de ella, y poniendo luego á los reos que merecian pena corporal en libertad bajo de fianza, y proveyendo el auto de 10 de Marzo en la cuarta pieza, cuando en la primera se había escusado por parentesco con uno de los testigos, segun aparece á fojas 39. Del C. juez Manuel Romero Ancona, que á pesar de haber llamado á juicio verbal, admitió pruebas inconducentes y contrarias á la confesion de los reos, complicó el procedimiento criminal, y puso en libertad á reos mandados á prision segura. Del C. juez José Jesus Castro que se ocupó de incidentes, omitiendo la publicacion de pruebas y sentencias que debió pronunciar en el juicio verbal de comiso pendiente, cuando tomó conocimiento de estos autos. Del C. juez Yanuario Manzanilla que incurrió en las mismas faltas de su antecesor, que hizo emplazamientos indeterminados, que sin estar estos cumplidos en manera legal, declaró la rebeldía y pronunció sentencia en términos oscuros, omitiendo su notificacion á las partes y la aprehension de los reos que condenaba á pena corporal. Del C. administrador de la Aduana marítima de Sisal, que delegó sus facultades para el cotejo y despacho de los efectos embargados al C. Domingo Mendiburo, fojas 12 primera pieza, cuando debió hacerlo ante sí y sin resolucion alguna por depender esta del juzgado que conociere del juicio de comiso; que así mismo aparece que infringió el art. 144 de la ley de procedimientos, porque segun aparece á fojas 57 de la primera pieza, permitió á D. Antonio Riveron fuese el conductor como propietario de efectos que debieran decomisárselo. Del defensor Lic. D. Tiburcio Manzanilla, por la falta

que ha cometido, produciendo pruebas contra la confesion no reclamada de sus defendidos, colocando la verdad en extremos contradictorios; y por último la de los guardas CC. Jacinto Avila y Miguel Gonzalez, que omitieron investigar y aprehender los baulles nuevos que sospecharon contener contrabando; y

Noveno; que respecto del capitán del pailebot "Rita," D. Antonio Martinez, existen circunstancias especiales para no hacerlo sufrir los diez años de presidio á que lo condena el C. juez de Distrito, como son la de conducir familias emigradas, la de haber sido aceptado su procedimiento por el jefe político que era la autoridad de aquel lugar con quien debía entenderse; por la arribada que hizo en Cozumel en favor de los emigrados, y la de ignorar la destitucion de las autoridades que lo habian despachado de la Isla Mujeres á San Pedro, con cuanto mas ver y considerar convino, el C. juez dijo: que administrando justicia en nombre de la Nacion, debía revocar, como desde luego revoca, la sentencia pronunciada el 25 de Agosto último en la parte que condena á D. Antonio Martinez, reduciéndola á dos años, y así mismo en la condenacion que hace á D. José Dolores Duarte, cuya falta se dá por compurgada con la prision sufrida, confirmando dicha sentencia en todo lo demas, y mandando que confirmada esta sentencia por la Suprema Corte, á quien al efecto se elevarán los autos, se haga un serio apereibimiento á los jueces y empleados á que se contrae el octavo considerando, por las faltas que en él se expresan, haciéndoles comprender su gravedad, y que por ser de procedimiento están escusados de la pena que establece el art. 79 de la ley de 24 de Marzo de 1813, y que se libre despacho al juez de Distrito para la aprehension de los Sres. D. Rafael Crisanto Muñoz y D. Antonio Martinez, á quienes conservará en la cárcel pública para el cumplimiento de esta sentencia despues de su revision, dando al alcaide de la cárcel la constancia respectiva.

Y por este que la autoridad proveyó, así lo manda y firma, de que doy fé. (Firmados).—*Sebastian Rubio.*—*Mauricio Tejero.*

Pedimento del O. Procurador General de la Nacion.

El Procurador General de la Nacion, dice: que esta causa, monstruosa y anómala por muchos motivos, comenzó á formarse en el mes de Agosto de 1867; que fué sentenciada por el juez de Distrito del Estado de Yucatan el 25 de Agosto de 1868: que el tribunal de Circuito de Mérida la revisó y reformó en 22 de Setiembre del mismo año; y fué recibida en esta Suprema Corte de Justicia el 19 de Octubre inmediato. El que suscribe ha creído conveniente consignar estas fechas, porque en el "Loca" respectivo aparece que se le ha mandado pasar con fecha 24 del corriente, es decir, hace cinco días.

Hechas estas esplicaciones, pasa á ocuparse del proceso que, como ha dicho, es por demas monstruoso y anómalo.

La ley de procedimientos vigente para los juicios de comiso, es en extremo sencilla y expeditiva. Sus trámites sustanciales se reducen á oír la demanda verbal del representante del fisco; la contestacion tambien verbal del responsable del presunto contrabando; las pruebas respectivas, si el caso lo requiere, y el juez las estima necesarias; y los alegatos verbales de las partes. Concluida esta sencillísima sustanciacion, el juez pronuncia su fallo con arreglo á derecho.

La misma ley de procedimientos, mirando siempre á la verdad y expedicion de estos juicios, ha dispuesto que en ellos no se mezcle la responsabilidad criminal de las que aparecen complicadas en el contrabando, sino que ésta se persiga por cuerda separada y en juicio criminal ordinario.

Todo lo dicho pone en evidencia una ver-

dad que nadie desconoce, y es, que los juicios de comiso son puramente civiles y en ellos no se trata mas que de los derechos legítimos é intereses del fisco.

Contraviniendo á todos estos principios y á todas las reglas de una buena sustanciacion, en el presente proceso se ha hecho la mas incoherente y absurda aglomeracion de diligencias, ya del orden civil, ya del orden criminal; y lo que es peor todavía, se ha pretendido dar una unidad imposible á las acciones civil y criminal. Esta injustificable pretension ha dado por resultado la ineficacia de todos los procedimientos, ya se quiera clasificarlos en el orden civil, ya se intente reducirlos al orden criminal. La consecuencia lógica del gran cúmulo de aberraciones que se han cometido, debia ser la nulidad de todo lo actuado y la reposicion del proceso en sus dos distintos objetos; es decir, la celebracion del juicio de comiso conforme á las prescripciones del arancel general de aduanas; y despues de la sentencia condenatoria en este juicio, la formacion del criminal conforme á las reglas que en él deban observarse. Esto pediria el que suscribe, si hubiera de sujetarse estrictamente á los principios de nuestra legislacion; pero encuentra razones especiales y á su juicio muy atendibles para desviarse un poco del absoluto rigorismo de los principios.

El contrabando de que se trata, segun aparece de las fechas arriba consignadas, se cometió hace cuatro años; los efectos aprehendidos han sido enagenados, y el Pailebot "Rita" fue entregado á su dueño bajo la caucion correspondiente.

Por otra parte, aunque muy irregular y monstruosa la averiguacion practicada, siempre ha arrojado como verdad cierta la existencia del contrabando; y lo que es mas, tanto el Juez de Distrito como el Magistrado de Circuito, están conformes en reconocerlo y declararlo.

Esto supuesto, se puede con segura conciencia decir, que el juicio de comiso ha sido

ampliamente sustanciado y el contrabando declarado con arreglo á justicia. No se puede decir lo mismo respecto del procedimiento criminal, porque los errores en él cometidos, las infracciones de ley en él incurridas no pueden subsanarse, sino dando á los procedimientos todo el orden y legalidad que les falta.

Con relacion á esto último, el que suscribe podía expresar en detall la multitud de irregularidades é infracciones de ley que desde luego resaltan; pero no cree oportuno hacerlo, porque á su juicio no es tiempo todavía de revisar el proceso; y porque además, ni la Sala ni el que suscribe deben anticipar sus conceptos sobre unas actuaciones que despues han de revisar.

Por las consideraciones expresadas, el Procurador General concluye pidiendo:

Primero; en cuanto al juicio de comiso, que atenta la verdad y la justicia perfectamente conocidas ya, y en atencion tambien á la conformidad sobre este punto, de los fallos de 1ª y 2ª instancia, se declare ejecutoriado el negocio.

Segundo; que en cuanto al procedimiento criminal, por haber sido irregulares todas las actuaciones, y porque en tal virtud inducirian nulidad en el fallo, se devuelva el proceso al Juzgado de su origen para que lo reforme y perfeccione con arreglo á derecho.

Tercero; el Procurador General se reserva para pedir á su debido tiempo sobre los puntos de responsabilidad.

México, Junio veintinueve de mil ochocientos setenta y uno.—*L. Guzman.*

Ejecutoria de la 1ª Sala de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio veintisiete de mil ochocientos setenta y uno.

Vistas las diligencias practicadas con motivo de la introduccion á la Isla de Cozumel de varios efectos que conducía el pa-

lebot nacional "Rita;" las sentencias pronunciadas por el Juzgado de Distrito de Mérida y por el Tribunal de Circuito de Yucatan: lo alegado para sentencia ante esta 1ª sala por el C. Lic. Pablo Vigueras nombrado defensor de D. José Dolores Duarte: lo alegado al tiempo de la vista por el C. Lic. Francisco T. Gordillo, nombrado defensor de D. Antonio Martínez y D. Rafael Crisanto Muñoz: el pedimento del C. Procurador general de la nacion y todo lo demas que convino; de conformidad con lo pedido por el C. Procurador general y por sus propios legales fundamentos; se declara.

Primero; en cuanto al punto del comiso, que está ejecutoria la sentencia que lo declaró por ser conformes respecto de él las de 1ª y 2ª instancia.

Segundo; en cuanto al procedimiento criminal, que por ser irregulares todas las actuaciones, se devuelva el proceso del Juzgado de su origen para que lo reforme y perfeccione con arreglo á derecho.

Remítanse dichas actuaciones de 1ª y 2ª instancia al Tribunal de Circuito de Yucatan con copia certificada de esta sentencia y del pedimento del C. Procurador general, para los efectos consiguientes: hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo mandaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*P. Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias México Agosto ocho de mil ochocientos setenta y uno. *Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.